

Paro y emigración, los males endémicos de Andalucía: algunas sugerencias (*)

1. Consideraciones Generales.

El tema de la problemática del paro y la emigración ha adquirido en los últimos tiempos lo que cabría calificar de «rentabilidad política». En efecto, hasta no hace mucho, el suscitar en conferencias o artículos esta temática y su grave precio social y económico, provocaba en los sectores más ortodoxos del régimen extinto inevitablemente acusaciones de derrotismo, cuando no de subversión. Ello se explica si se tiene en cuenta que en un régimen que desconocía no sólo la autocritica sino cualquier tipo de actitud crítica, y en el que oficialmente se vivía en el mejor de los mundos posibles, no se podía aceptar abiertamente dicha problemática. Evidentemente no se podía ocultar la existencia de la emigración, aunque se soslayase la cifra real de paro, pero se presentaba a la emigración como beneficiosa para los lugares de los que partía y para las personas a las que afectaba.

Sin embargo, iniciado el profundo cambio político que vive el país desde finales de 1975, y sobre todo en vísperas de las elecciones generales del pasado 15 de junio, los partidos de todas las ideologías presentaron en sus slogans la necesidad de acabar con el paro y la emigración. Incluidos los partidos cuyos componentes en gran mayoría militaron fervientemente en las filas del franquismo, que tan poco hizo por acabar con estos males y que incluso en buena parte los provocó. Es más, durante la visita del Rey a una capital andaluza hace unos 2 años, el

(*) El presente artículo corresponde a la versión escrita de una conferencia, patrocinada por el Ateneo de Málaga, que pronuncié el 2 de diciembre de 1977. Esto explica tanto su peculiar estilo discursivo, como el que no se acompañen más datos que los que normalmente asimilables por su auditorio. Deseo agradecer su valiosa colaboración al Prof. David Gregory, que me ha proporcionado algunas de las referencias que aquí se contienen.

alcalde de ésta, como se recordará, se apresuró a plantear al monarca la existencia en su provincia de abundancia de parados y emigrantes, cosa que jamás se le hubiese ocurrido suscitar en presencia del anterior Jefe del Estado. Así pues, no solo preocupa el problema actualmente, sino que por diversos motivos, al no poderse ya ocultar obtiene, como digo, rentabilidad política.

Sabido es que la participación de Andalucía en el producto nacional bruto ha ido disminuyendo paulatinamente desde el siglo pasado, por haberse mantenido en ella una estructura fundamentalmente agraria. Pero sobre todo en las últimas décadas, no sólo no se ha promovido la creación de empleo en nuestra región, a través de los sectores secundarios y terciarios, sino que nuestra agricultura ha servido para financiar a dichos sectores, más favorecidos por su implantación en otras regiones, a través de fondos públicos y privados.

El desempleo ha sido, pues, un mal endémico en Andalucía, y la emigración su secuela inevitable. Sólo desde los años 50, estimaciones como las del Prof. García Barbancho, cifran la salida de andaluces para el extranjero u otras regiones españolas en cantidades superiores al millón de habitantes. Y a pesar de esta salida, puede decirse que en este momento, uno de cada seis andaluces es víctima del paro o del subempleo, sin que las perspectivas a corto o medio plazo sean mejores. Y es que, como dicho mi maestro el Prof. Murillo Ferrol, en Andalucía el trabajo ha sido bien escaso en sí mismo. Por eso la alienación que produce tal escasez es superior a cualquier otra. No se trata ya de encontrarse frustrado o alienado por desempeñar un trabajo que no llena plenamente nuestra condición humana, sino que millones de andaluces han sufrido una alienación aún peor al salir cotidianamente a buscar trabajo y no encontrarlo.

Desde ahora es preciso decir que esta situación es radicalmente injusta, porque Andalucía no es, como voces interesadas han dicho, una región pobre, sino empobrecida, que ha exportado sus recursos naturales, su capital financiero y su capital humano a otros lugares, en donde se les ha explotado. Las potencialidades naturales y de creación de riqueza andaluzas en gran parte están, todavía hoy, inéditas y por eso la desigualdad es más hiriente aquí. En otros países europeos existen situaciones hasta cierto punto similares. Tal es el caso de Italia e Inglaterra, por citar solo dos. Pues bien, hace años, se creó en Italia la Cassa Per Il Mezzogiorno, que en los últimos diez años ha invertido en la zona meridional, y especialmente en Sicilia, el equivalente a 700.000 millones de pesetas, creando una diversidad de industrias, y por ende de puestos de trabajo que es admirable, aún cuando no haya resuelto totalmente el problema de aquella región, en particular por la notable densidad de población que en ella se acusa, y que es incomparablemente superior a la andaluza. En cuanto a Inglaterra, se han creado preferentemente

puestos de trabajo en Escocia y Gales, que con sólo el 20 % de la población del país, han obtenido más de la mitad de los nuevos empleos surgidos en los últimos diez años, potenciando así su desarrollo en la única forma en que ello se puede hacer eficazmente. Los ejemplos de otros países europeos son similares, y en todos los casos, a través de una adecuada planificación, se están considerando resultados muy aceptables.

Veamos ahora el caso de Andalucía. La creación de los Polos de Desarrollo, obra del régimen anterior, solo tuvo aquí efectividad en el caso del de Huelva y ello más bien en el aspecto económico y de producción, puesto que no promovió, dadas sus características, abundancia de empleo. Los del campo de Gibraltar y Sevilla obtuvieron solo muy parciales, el de Córdoba quedó aún más atrás, y finalmente el de Granada, en los siete años que median desde su creación, solo ha permitido la colocación de unas seiscientas personas, en industrias que prácticamente en su totalidad hubiesen surgido de todas maneras, por ser su capital sobre todo de origen local.

Adviértase que todos los Polos se crearon en centros urbanos, lo que contribuyó a la congestión y alto costo de montaje de servicios en éstos. Es más, como señalaba hace poco García Ferrer, paradójicamente este favorecimiento de las ciudades aumenta el paro en ellas, en lugar de disminuirlo, ya que por cada puesto de trabajo que se crea, acuden tres inmigrantes para cubrirlo desde un medio rural tan desasistido como el nuestro.

Fracasada la política de Polos, entre cuyo planeamiento y la realidad solo había meras coincidencias, recientemente se ha creado SODIAN, cuyo capital, como es sabido, es de 1.000 millones de pesetas. Cifra que resulta insignificante, no sólo en comparación con las ingentes necesidades de inversión de Andalucía, sino incluso con relación a otras inversiones estatales. Por ejemplo, según noticias de prensa, para el año 1978 la inversión del INI sólo en ENSIDESA (Asturias) será de 25.000 millones de pesetas. Así pues, y salvo que su capital se multiplique por un alto factor, en el mejor de los casos SODIAN sólo podrá cubrir una insignificante parcela de las exigencias empresariales andaluzas.

A pesar de todas las protestas de interés, tanto los Polos como SODIAN solo han sido «parches» políticos utilizados por los sucesivos gobiernos para encubrir con apariencias de eficacia el abandono en que desde hace tan largo tiempo se ha encontrado nuestra región. Otras medidas similares a que se ha recurrido periódicamente desde hace años, aún todavía hoy, han sido la concesión de subvenciones a los gobernadores civiles para «mitigar el paro». Subvenciones que no sólo han sido insignificantes en comparación con el problema a que había que hacer frente,

sino que nunca han creado empleo estabilizado. Peor aún, han sido utilizadas como instrumentos de control político de los alcaldes, en mano de los gobernadores, los cuales han asignado preferentemente los fondos no a las localidades en que había más paro, sino a los alcaldes que por las razones que es fácil suponer, les resultaban más dóciles y gratos.

Consecuencia en definitiva del desinterés del poder central, de la desigual estructura de la propiedad, y de la mentalidad precapitalista de la oligarquía regional, con su habitual falta de iniciativa, ha sido la permanencia secular de un proletariado agrícola al que solo se le dejaba su fuerza de trabajo que vender. A partir de comienzos de nuestro siglo, el crecimiento vegetativo resultante de la disminución de la mortalidad (sobre toda infantil), y una natalidad aún relativamente alta, provocó un incremento de presión sobre los medios de empleo, que si aumentaron algo en el sector servicios —especialmente en la costa— disminuyeron muchos más en el sector agrario. La única alternativa, pues, que se ofreció a nuestros hombres fue, en fin, la emigración. Emigración que presenta caracteres atípicos, aparte de los usuales en ella. Así por ejemplo, la escasez de empleo ha hecho que tradicionalmente los licenciados de las Universidades andaluzas también hayan de encontrar ocupación en otras regiones capaces de absorber sus conocimientos. Por citar un solo caso, en un libro que recientemente he dirigido sobre la Universidad de Granada, se demuestra como tres años después de terminar su carrera, cerca de la mitad de sus licenciados en Derecho aún no han encontrado un trabajo permanente.

Pero el mayor número, lógicamente de emigrantes, procede de la clase obrera, rural o urbana, la precariedad de cuya situación no requiere mayor descripción, y el recurso usual de esta extensa capa de la población andaluza ha sido la emigración a otras zonas españolas o en el extranjero. Resulta irónico pensar que el esfuerzo de estas gentes ha contribuido poderosamente a financiar precisamente los puestos de trabajo creados en otras regiones a los que ellos terminan por marcharse a ocupar. Igualmente frecuente ha sido, como digo, la marcha al extranjero, propiciada indirectamente por los sucesivos gobiernos dadas sus evidentes ventajas para ellos.

En efecto, es evidente que el emigrante al extranjero produce una fuerte plusvalía (superior a la del trabajador indígena de similar nivel de conocimientos), y por supuesto mucho mayor, desproporcionadamente que la del trabajador indígena semiespecializado o especializado. Esta plusvalía beneficia a los propietarios de los medios de producción del país de destino, para los que el trato con el inmigrante es además de rentable, más cómodo, por evitar a menudo problemas de reivindicaciones salariales, sindicales, de participación, etc. Beneficia igualmente a

los tenedores del poder en el país de origen al proporcionarles una importante y saneada fuente de divisas y eliminar un peligroso foco de inquietud política derivada de su situación de paro en el caso que no emigrase. Además, al hacerlo, introducen repercusiones económicas indirectas, reduciendo la competitividad del mercado de mano de obra, y favoreciendo la dinámica de la compraventa de tierras, construcciones, muebles, servicios del hogar, y demás con la inversión de sus ahorros. Se puede calcular que entre finales de los años 50 y 1973, emigró a los países centroeuropeos un volumen de españoles próximo a los 2 millones de personas —aparte las emigraciones de temporada— del que correspondió a Andalucía una proporción que osciló entre los 30 y el 40% del total de emigrantes. Pero todo ello a costa de graves sacrificios personales y familiares. Así, trabajos agotadores rechazados por los naturales del país, horas extraordinarias excesivas, problemas de salud mental y física, tensiones familiares, aislamiento cultural, ghettos, sentimientos de discriminación y desprecio por parte de los habitantes locales, condiciones inaceptables de vivienda, etc. Ha sido frecuente el privarse para ahorrar hasta el máximo no sólo de toda clase de diversión o espectáculos, sino hasta de una modesta bebida en un bar. En una fábrica de Rusell Heim, los trabajadores españoles se dedicaban por las noches a cazar ranas en un pantano próximo para ahorrar parte de sus gastos de alimentación. ¿A quien ha beneficiado tan extraordinario sacrificio? Desde luego Andalucía no, es decir, a su clase trabajadora no.

Adviértase que en los últimos 20 años cabe estimar el volumen de las remesas enviadas por los emigrantes andaluces en una suma que oscila entre los 200 y 250 millones de pesetas. ¿Qué parte de esa ingente cantidad se ha invertido aquí?

Pero la situación va a cambiar a partir de 1973. La crisis económica que entonces se inicia va a cortar en sólo 2 años casi totalmente la entrada a emigrantes no pertenecientes al mercado común, e incluso éstos van a verse en dificultades para encontrar trabajo fuera de su propio Estado. Cientos de miles de trabajadores, y entre ellos innumerables españoles, van a volver en muchos casos frustrados en sus expectativas de promoción económica, a sus lugares de origen. Porque no podrá olvidarse que junto a los factores objetivos de desempleo que provocaron su salida, operaron con gran eficacia otros de orden psicológico. Así, los «grupos de referencia», los otros emigrantes anteriores que habían ahorrado y volvían con opulencia (a menudo solo aparente) a sus aldeas o adquirían tierras o negocios allí o en la ciudad. Grupos de referencia fueron también los otros andaluces, más pudientes que prosperaban y conseguían dar educación a sus hijos, las previsiones consumistas de los medios de masas, en particular la televisión, la deliberadamente falsa ideología del desarrollo al alcance de todos, etc. Y por tanto, al ser mayores las expectativas, la frustración de muchos de los retornados de los últimos años fue también mayor.

2. *Consecuencia en cuanto a los movimientos migratorios. Los retornos.*

Toda esta problemática hizo que desde el año pasado la fundación Ford financiase, con la colaboración de mi Universidad, una investigación en la que, bajo mi dirección, participan profesores norteamericanos y portugueses, en torno a las consecuencias políticas, económicas y sociales del retorno de los emigrantes a Andalucía y el Algarve. Esta investigación se encuentra actualmente en su última fase y sus resultados aparecerán en forma de libro en 1978 simultáneamente en Estados Unidos, Portugal y España.

Aparentemente, las dos regiones meridionales de ambos países, separadas sólo por el Guadiana son similares. También, sus procesos económicos demográficos y políticos son bastante parecidos: por un lado altas tasas de paro e inflación y por otro sendas aperturas hacia un proceso de democratización, aunque en sus consecuencias locales sea diferente, ya que en España permanecen aún las autoridades locales y provinciales procedentes del régimen anterior.

En la investigación hemos distinguido entre los propios emigrantes, los que no emigraron —lo que diríamos el hombre de la calle— y la élite política, social y económica que disponen de mejor información. Voy a hacer una breve mención de algunos de los resultados de este trabajo, rigurosamente inéditos, y que pueden ser de interés.

Ante todo, se ha confirmado nuestra hipótesis de que existe una muy diferente actitud entre los emigrantes interiores y los exteriores. Así entre los que decían marcharse de su comunidad, los menos integrados en ella suelen hacerlo de manera definitiva, y entonces se establecen en los grandes centros urbanos como Barcelona o Lisboa. En cambio, los que han marchado a Europa generalmente lo han hecho con la intención de volver a sus lugares de origen, mejorar allí su posición social y económica con los ahorros adquiridos al cabo de varios años de duro trabajo en el extranjero. Aparentemente, pues, estos emigrantes son más conservadores, relativamente menos emprendedores que los otros, menos decididos a romper todos sus lazos con su comunidad de origen, decisión que evidentemente es difícil especialmente para personas con sus características culturales.

Las técnicas utilizadas en base a datos primarios han sido: observación participante durante varios años en el Algarve y en cuatro provincias de la Andalucía Central (Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba). Posteriormente aplicación de cuestionarios a cuatro diferentes muestras de población en cada una de las regiones (élite local, emigrantes, no emigrantes, y directores de entidad de crédito). Deseo expresar aquí mi agradecimiento a los profesores Joao P. Neto y David D. Gregory

por su valiosa colaboración como directores adjuntos en esta investigación. Las observaciones que a continuación se hacen respecto a la emigración están recogidas en parte en un trabajo del Profesor Gregory, de próxima publicación.

Pero es que al volver los emigrantes del extranjero, nuestra sociedad es doblemente injusta con ellos: cuando marcharon en los años 60, su éxodo sirvió para aliviar la presión sobre el mercado de trabajo. Ahora, esperamos de ellos que su retorno estimule una creciente actividad económica, y promueva nuevos empleos. Por tanto, estos hombres y mujeres desempeñan el poco envidiable papel de ser considerados a la vez un problema y una solución.

Desde el primer momento, nuestro análisis ha mostrado un gran contraste entre Andalucía y el Algarve. Mientras en éste predomina un campesinado con tierras, en nuestra región la mayoría de los habitantes del medio rural son simplemente proletarios sin propiedad inmueble alguna. Por eso, al preguntárseles la razón por la que primero emigraron, tanto la élite andaluza, como los emigrantes y los no emigrantes estuvieron de acuerdo en sus tres cuartas partes en que la causa principal era la falta de empleo estable. Esta opinión fue mucho menor, de la cuarta parte a un tercio, en los tres grupos entrevistados en el Algarve.

Limitándonos a nuestra región, surge también una curiosa comparación entre las actitudes de estas tres muestras de población. Para los emigrantes, el problema más importante es la necesidad de redistribución de la propiedad agraria y de cambio en los detentadores del poder. En cambio la élite y los no emigrantes solo hablan de la necesidad de cambiar la mentalidad de los más pudientes. Es de destacar que los tres grupos se manifiestan de acuerdo en que para prosperar, Andalucía ha de encontrar unión y trabajo, factores que se sitúan por encima de otros como justicia, orden, paz, o libertad. También opinan todos que los principales responsables de las iniciativas de industrialización que más habían beneficiado a los pueblos eran generalmente inversores privados «de fuera». Resulta curioso que ante la pregunta de que si el entrevistado tuviera alguna iniciativa en beneficio del pueblo, quien sería el que menos probablemente diese su apoyo, la respuesta más general fue «el cura». Lo que demuestra un cambio fundamental en la perspectiva media respecto al papel del sacerdote. Tampoco se pensó que los emigrantes retornados ayudarían mucho, mencionándoles sólo el 2% de los entrevistados.

Los ahorros de aquellos, oscilan por lo regular según nuestra experiencia entre el medio millón y el millón y medio de pesetas, con una media próxima al millón. Pues bien, lo más usual es que se gasten ante todo en mejorar o construir una vivienda, en segundo lugar en montar algún pequeño negocio, y finalmente en adquirir un vehículo de trabajo. Ante la pregunta de si volvería a gastar sus aho-

rrros de la misma manera, más de los 2/3 de los retornados respondieron afirmativamente. Pero al mismo tiempo reconocían que no habían adquirido en la emigración ninguna nueva capacidad o conocimientos técnicos que les fuesen útiles para su promoción personal en su pueblo.

Por eso, en muchos de nuestros pueblos se ha producido lo que mi colaborador, el Prof. Gregory, denomina «un desarrollo cosmético», es decir, una mejora superficial, exterior, pero bajo la cual no hay ningún cambio fundamental en la estructura social y económica. Esto hace más difícil explicar por qué regresan a sus pueblos de origen los emigrantes. Diversos estudios, coincidentes en este punto con el nuestro, han mostrado la particular sensibilidad de quienes emigran ante posiciones de clase y status allí. Tal sensibilidad fue la que previamente les impulsó a marcharse con vistas a mejorar eventualmente su posición a su vuelta. Es decir, las motivaciones parecen a veces más sociales que propiamente económicas. No se intenta tanto el obtener una independencia económica como el conseguir un status algo más elevado a través de unos signos exteriores y una evidente y necesaria mayor comodidad en su medio de vida.

Desgraciadamente, la readaptación del retorno a su medio ambiente original presenta casi tantas dificultades como la que sufrió previamente en el extranjero. Los que le rodean tienen una imagen —sobre todo formada a través de los medios de masas— que contrasta vivamente con sus experiencias. Así, le desilusiona ver como ni sus vecinos ni su familia comprenden bien los aspectos en que ha mejorado como persona y los sacrificios que ha hecho. Si, se sabe que ha cambiado y aprendido cosas que en el pueblo jamás hubiesen estado a su alcance. Pero esos conocimientos le son allí de muy escasa utilidad. ¿Donde —le preguntamos— podrían servirle? La respuesta casi unánime fue, fuera de la comunidad, en las regiones más industrializadas.

Si el retornado no se adapta de nuevo al sistema de vida del pueblo pronto descubrirá que su comportamiento al principio produce extrañeza y luego hostilidad, entre sus amigos, en las autoridades, e incluso en su familia. Y paradójicamente aquel que tenga mayor iniciativa a menudo será el que cuente con menos ayuda.

A esto se une también no pocas veces los resultados de experiencias comerciales o industriales acometidas con mejor intención que conocimientos. O el exceso de confianza en familiares o conocidos, que pueden abusar de la prolongada ausencia del emigrante usando los ahorros de este en provecho propio. La tristeza de ver disipados todos los ahorros adquiridos tras largos años de lucha, llevaba a uno de nuestros entrevistados a declarar con cierta ingenua amargura:

«Lo duro es ver tu sueños y aspiraciones aplastados en tu propio pueblo por parientes y amigos... Me gustaría tener alguna vez dinero suficiente para construir una casa con una torre en lo alto de la Sierra más alta que aquí tenemos. Construiría también una carretera hasta allí, iluminada hasta el último kilómetro. En la torre colocaría un telescopio de gran potencia y lo enfocaría hacia el pueblo. Así ofrecería a mis invitados una diversión: un lugar allá en lo alto desde el que contemplarían las disputas y desunión de mi pueblo».

Sin embargo, es evidente que los retornados pueden convertirse en una fuerza positiva hacia el desarrollo de puestos de trabajo en la medida en que se comprendan mejor sus actitudes en torno a la colaboración, la importancia básica que en su sistema de valores tiene la posesión de un empleo fijo, y su incapacidad para lograr el éxito frente a los obstáculos locales, si no se les presta ayuda exterior. Por eso, la respuesta unánime a lo que era más necesario para que la gente colaborase entre sí fue «unión, solidaridad y espíritu de cooperación».

Es notable que más de la mitad de la élite local recordase con facilidad tentativas de creación de cooperativas que tuvieron éxito; en cambio la mayoría de los emigrantes y no emigrantes solo recordaban fracasos. Mostraban éstos una gran desconfianza hacia tales intentos, y en caso de hacerlo solo decían que esta mentalidad, desgraciadamente fruto de repetidas experiencias propias o ajenas, constituye uno de los principales obstáculos al desarrollo de nuestro medio rural. Se da así una actitud ambivalente: por una parte se valora enormemente y se desea, como antes decía, la unión, la cooperación. Pero por otro lado se mira con recelo toda tentativa para hacerla efectiva.

A la pregunta de que harían si pudieran disponer libremente de un millón de pesetas, la elite respondió generalmente que la usaría para mejorar sus fincas. Emigrantes y no emigrantes dijeron que lo usarían para comprar tierras. Sin embargo en los últimos tiempos la experiencia demuestra que es muy frecuente el caso de retornados que —convencidos al fin de la baja rentabilidad de la agricultura, especialmente con el tipo de inversiones que ellos pueden hacer— optan por adquirir pisos, que alquilados convenientemente proporcionan unos ingresos fijos, apreciables, grandes y sin inconvenientes.

Lo que se valoró más, en fin, por los retornados es la existencia de un empleo fijo aunque sus ingresos sean modestos, frente a los riesgos de iniciar un negocio o actividad, que aparentemente más lucrativa sea también más azarosa. En una región como la nuestra, en que, como decía antes, el trabajo ha sido precario, la iniciativa empresarial ha sido casi inexistente en los poseedores del poder economi-

co. Las clases medias han sido reducidas y casi siempre han estado al servicio de la alta, y la clase trabajadora o no ha contado con fondos para respaldar su iniciativa, o más frecuentemente ha soterrado ésta ante el imperativo cotidiano de la supervivencia. Es más, como hemos visto, la experiencia de actuaciones cooperativas ha sido demasiado frecuentemente negativa y ello produce la inhibición del espíritu empresarial en un amplio ámbito, por ejemplo, en toda la localidad, a través del «efecto demostración».

Cabe señalar, sin embargo, que la nueva situación política española, a partir sobre todo del pasado junio abre una puerta a la esperanza. Los recelos ante toda colaboración entre trabajadores, que hasta hace muy poco era mirada con sospecha por las autoridades, las fuerzas de orden público, los sindicatos oficiales y los «beati possidentes» de las localidades de nuestro medio rural, han perdido toda su razón de ser en un régimen que comienza a ser democrático o, y en que debe controlarse mucho mejor toda administración sea de fondos públicos o privados. Hoy deben aprovecharse las posibilidades que ofrecen nuestros retornados, cuya estancia en el extranjero les ha convertido en personas más conocedoras de la realidad de un país industrial y probablemente mucho más consecuentes consigo mismas. O sea, han adquirido una nueva conciencia social en que se valora más su tiempo y su esfuerzo, y que califica a la estabilidad del empleo como un derecho político más. Esto explica que en las elecciones del 15 de junio hayan obtenido con frecuencia más votos los partidos de izquierda radical precisamente en los pueblos donde hay mayores tasas de paro y emigración. E igualmente se explica que los líderes de los nuevos sindicatos de las zonas rurales sean ahora a menudo emigrantes retornados. Tanto a efectos de desarrollo económico como de modernización de su conciencia política, el éxito de los retornados depende del grado en que cambie su relación con los ámbitos del poder local que los rodean, pero este éxito sólo puede lograrse mediante una sutil ayuda desde el exterior, no solo a través de sus iniciativas aisladas, personales.

3. *Posibles medidas de orden técnico y político.*

Toda esta grave y amplia panorámica de la situación de emigrantes, retornados y parados andaluces, no es por supuesto exclusiva de nuestra región, sino que afecta a otras muchas, especialmente en la mitad sudoeste del país. Pero no basta con hacer un diagnóstico de la causalidad y una breve descripción de algunas de sus consecuencias, sino que es preciso señalar algunas orientaciones, sugerencias o quizás más bien reflexiones respecto a las medidas que sería preciso acometer para, a un plazo medio, acabar o al menos reducir a su mínima expresión una injusta situación que no solo no lleva trazas de mejorar sino que amenaza con empeorar a

pasos agigantados. Y los resultados pueden ser imprevisibles, pero en cualquier caso indeseables y quizás irreversibles.

Cabe dividir las medidas que podrían adoptarse en dos tipos generales: de orden técnico y de orden político. Veámoslas sucesivamente.

Como he señalado anteriormente, el origen generalmente inmediato y en la gran mayoría de los casos por lo menos, mediato de la emigración se encuentra en las zonas rurales, tanto en el caso de los movimientos interiores como hacia el exterior. Muchas veces estas zonas que producen emigración —y que abarcan la mayor parte del país, es decir casi cuarenta provincias, poseen comarcas y núcleos de población que están experimentando pérdidas, aún cuando sus posibilidades de crecimiento serían apreciables. En efecto, muchas comarcas podrían lograr un apreciable desarrollo económico y social si se estudiasen debidamente sus potencialidades en los más diversos aspectos, es decir, mineralógico, turístico, de cambio de cultivos, etc. Naturalmente, este tipo de estudios requiere considerable tiempo y medios, pero si se hubiesen acometido hace varias décadas, a estas alturas poseeríamos un completísimo panorama de las posibilidades reales de tantas zonas del país que están siendo hoy irracionalmente abandonadas. En efecto, a menudo con reducidas inversiones, pero con una planificación adecuada a cada caso, sería perfectamente factible fijar en unas condiciones de vida digna una población que no sólo se autoabasteciese dentro de un marco geográfico relativamente reducido, sino que incluso exportase productos o servicios a otras zonas nacionales y aún extranjeras.

Como digo, este planteamiento requeriría forzosamente estudios en profundidad de las diversas comarcas españolas. Estudios que con una visión de futuro mostrarían no sólo las actuales potencialidades, sino también las condiciones en que cabría contar con ellas cara al porvenir. En cualquier planificación futura de estudios debería tener carácter muy prioritario. Porque mostrarían, en función de dicha perspectiva, no sólo las repetidas posibilidades de desarrollo, sino también las de agotamiento de recursos y congestión de las áreas ya industrializadas. No se pierda de vista que tales áreas, muy específicas en nuestro país, como son fundamentalmente Vascongadas, Madrid y Cataluña, están alcanzando unos grados de concentración industrial, demográfica, de capital y de contaminación que hacen cada vez más costosa la inversión pública y aún la privada en las mismas.

Por otro lado, tales estudios mostrarían cómo en un cierto número de casos, comarcas que hoy presentan mayor o menor emigración, carecen de toda posibilidad futura de desarrollo. Así, algunas del Sureste o de la Meseta, áridas, deforestadas, sin recursos subterráneos, etc. Pues bien, con un conocimiento suficiente-

mente detallado, es indudable que podría orientarse a la población de dichas comarcas hacia una emigración racionalizada, previendo con suficiente antelación no sólo su traslado sino, lo que es más importante, las condiciones de su empleo y su vida en otras más desarrolladas. Estas zonas podrían dedicarse a pastos, bosques o destinos similares. Pero lo que es evidente es el hecho de que hoy muchas zonas del país poseen ya una población inferior a la que, bien explotados esos recursos, podrían mantener en un nivel de vida no inferior al promedio en el resto del país.

El ejemplo de naciones como Japón o Suiza, cuyos recursos mineralógicos son nulos, en donde el suelo —especialmente Japón— es pobre e incultivable, y cuya densidad de población es superior a la española, es muy digno de tenerse en cuenta. Una inteligente política de atracción de capitales, de inversión en industrias de alto valor añadido, y de completa explotación del espíritu empresarial, ha permitido a estas y otras naciones alcanzar altísimas cotas de desarrollo en condiciones que para muchas comarcas andaluzas son todavía hoy de superioridad, comparativamente, si se tienen en cuenta solo sus recursos naturales y demográficos.

Algo que se debería explotar es la existencia de un suficiente espíritu de logro o empresarial, en los distintos estratos sociales. Se comprobaría así la realidad de la teoría de Baran, en el sentido de que son las condiciones estructurales de los países o las regiones las que impiden la aparición del espíritu de iniciativa, que solo encuentra cauces, a menudo extraños o al margen de la ley, para cubrir las aspiraciones de los individuos que ocupan las capas sociales más bajas de esos países o regiones. En definitiva, pues y como sugerencia técnica y de carácter general a la problemática que aquí trato, propugno la necesidad de un estudio tan minucioso como preciso de la población y las condiciones de su hábitat, es decir de las potencialidades reales de este y de las posibilidades y expectativas del elemento humano en orden a una más integral forma de desarrollo de Andalucía, y a la consecución en general de un equilibrio suficiente en las demás regiones hoy deprimidas y emigratorias, que son mayoría en el país y las desarrolladas, congestionadas e inmigratorias, que son minoría.

Por otro lado, es preciso establecer soluciones técnicas a un nivel más bajo. Ante todo, es indispensable contar con datos estadísticos mucho más detallados que los actuales respecto a características de los trabajadores, origen geográfico, residencia habitual, estructura por edades, experiencia posible de emigraciones interiores o exteriores anterior, duración en empleos previos, y similar. Igualmente estadísticas sobre formación profesional y circunstancias del individuo, tales como tipo de viviendas, número de familias, edades y sexos de estas, niveles de estudios, etc.

Es indudable que el desarrollo de muchas comarcas, y por tanto la retención de su población, requiere una red de transportes y comunicaciones en muchos casos ahora inexistente. Son de particular importancia las comunicaciones por carretera, que han de contar no sólo con vías suficientemente modernas y capaces, sino también con servicios de pasajeros y mercancías adecuados. Por otro lado, se ha venido efectuando en nuestro país una política de creación de servicios en muchos pueblos, en especial en las «cabeceras de comarcas» según la definición de los servicios dependientes de la Presidencia del Gobierno, que no siempre va paralela a las posibilidades de estos. Esto significa que en mi opinión la clasificación de estos organismos se ha producido desde el habitual centralismo de nuestra Administración, centralismo que a menudo no ha tomado en consideración las peculiaridades de muchas comarcas. Se han fijado así en ocasiones centros comarcales que rápidamente demostraron no ser los más aptos, postergando otros que hubiesen tenido, con suficiente ayuda, mejor futuro. Naturalmente ello se debe a que la determinación de estas «cabeceras» se ha hecho antes de la realización de los estudios comarcales deseables que antes mencionaba, y no después.

Una importante aportación al conocimiento de la estructura administrativa y presupuestos de los municipios malagueños, por ejemplo, es la que ha efectuado el Profesor Cuadrado Roura. Estudios similares son los que deberían determinar, pues tales cabeceras.

Pero en todo caso debe advertirse que la creación de servicios de alcantarillado, alumbrado, saneamientos, pavimentaciones, instalaciones sanitarias y educativas que se ha acometido, puede resultar en muchos casos inútil si la población continua emigrando. Dicho de otro modo, no basta con la creación de servicios en las comarcas, si en estas no se crean medios de empleo en función de sus potencialidades. De lo contrario se producirá la paradoja de que en muchos lugares habrá unos buenos servicios para una población muy inferior a la que podría usarlos, problema que es exactamente el inverso en los lugares a los que afluye la inmigración. Es evidente que la creación de tales servicios, por sí sola no es capaz de fijar más que una porción mínima de los emigrantes reales o potenciales, y responde a una mentalidad paralela a la que antes atribuía a muchos retornados, quienes gastaban sus inversiones en arreglar sus domicilios, pero careciendo de empleo, se encontraban y se encuentran o bien en una situación de frustración, o bien ante la perspectiva de abandonar el fruto de sus trabajos para marchar a otro lugar con mejores posibilidades de empleo.

Por supuesto, entre las infraestructuras técnicas a introducir en los lugares que lo requieran, han de incluirse todas las que permitan el aprovechamiento integral de las fuentes de energía existentes en la zona, o bien su traída desde las vecinas.

Dicho sea de paso es curioso el hecho de que ciertas compañías eléctricas están dejando fuera de explotación en este momento, en Andalucía un buen número de pequeñas centrales, alimentadas por saldos de tipo medio, en producción desde hace años. ¿Acaso la energía nuclear es más rentable que estas centrales ya amortizadas?

Es sabido que la gran mayoría de las zonas productoras de emigración tienen un carácter marcadamente agrario. Pues bien, para que la población tuviese un nivel de empleo permanente y de ganancias suficientemente adecuadas a sus expectativas, se requeriría una profunda reforma estructural de nuestra producción agraria. Especialmente se trataría de obtener unidades de cultivo rentables tanto por su extensión como por la calidad y cantidad de sus productos.

Según se ha dicho por expertos en la materia, en nuestro país, considerado en su conjunto, no es rentable una explotación que en regadío sea inferior a las diez hectáreas y en secano inferior a las cincuenta. Naturalmente este criterio tiene en cuenta las condiciones de competitividad con que ha de enfrentarse España a nivel de los mercados internacionales. Ciertamente muchas extensiones muy inferiores permiten apreciables producciones, por ejemplo, de frutos tempranos en nuestra costa meridional, pero se trata de la excepción y no de la regla. Por supuesto, los costos de la mecanización y la reforma de los cultivos en general exigen sin duda extensiones mínimas similares a las señaladas. Y sin embargo, aún hoy en Andalucía Oriental el 90% de los propietarios poseen sólo el 20% de la superficie. El 10% restante es dueño de lo demás. Si a ello unimos el hecho de que las redes de comercialización de los productos agrarios son insuficientes y a menudo inexistentes, se explicará uno de los factores técnicos que en mayor grado contribuyen a nuestra emigración.

Es evidente que algunos nuevos organismos creados a este propósito no solo cubren adecuadamente sus funciones sino que además con frecuencia constituyen un obstáculo burocrático más para los agricultores. En este sentido no voy a entrar en una detallada exposición de la problemática y soluciones concretas de nuestro agro, que se alejaría en exceso de mi propósito aquí, limitándome sólo a apuntar su existencia.

Por otro lado, al desarrollo y reducción de la emigración de estas zonas contribuiría no poco la introducción de mejores métodos de cultivo o la sustitución radical de los existentes por otros más racionales y productivos. En muchos casos esto requeriría una acción paulatina, pero en otros, podrían introducirse simplemente al final de la cosecha. En este sentido sería de gran eficacia la presencia mucho mayor que en el momento actual de técnicos agrícolas en todas las localidades

y en mayor proporción en las cabeceras de comarca. La elogiada labor que actualmente realizan los Servicios de Extensión Agraria debería multiplicarse por un alto factor, lo que dicho sea de paso, contribuiría a absorber un considerable número de técnicos de grado medio como serían estos especialistas agrícolas. Adviértase que en la actualidad sólo el 6% de los municipios españoles cuenta con un técnico agrícola en ejercicio.

Hasta el presente, no pocas veces se han montado industrias en lugares que carecían de energía y/o materias primas en nuestro país, utilizándose consideraciones más de orden político o de capacidad de consumo, que otras, quizás más racionales, decisorias de una industrialización competitiva. Tal es el caso del cinturón industrial de Madrid, creado a partir de los años 40. Precisamente la idea que propugno como factor de creación de empleo, básica para el desarrollo de las zonas hasta ahora emigratorias, partiría de la existencia en estas de recursos naturales de las más diversas clases que permitiesen una industrialización que crease empleo extensivo. El papel del Estado sería básicamente el estudio —como he dicho— de estas zonas, y a la vista de sus posibilidades, cuando existiesen, la creación de una infraestructura de comunicaciones, servicios y energía y su promoción ante los inversores nacionales o extranjeros. Surgirían así no «Polos» sino —como en muchos lugares del extranjero— zonas industrializadas dispersas con métodos de producción relativamente simples, utilizando materiales locales en todo lo posible y que no tendrían por qué coincidir con los grandes centros urbanos. Podrían igualmente potenciarse las variedades de artesanía local, hoy en trance tantas veces de perderse y que tan excelentes resultados están dando a la exportación comercial de, por ejemplo, un país como Japón.

Ciertamente, en una economía de mercado como hasta ahora es la nuestra, las empresas industriales han solido establecerse en donde mayor rentabilidad inmediata podrían obtener, es decir, en los ya conocidos puntos industrializados del país. Pero además de las consideraciones anteriores una acción eficaz estatal debería utilizar dos instrumentos que a este respecto se encuentran a su alcance aún en una economía capitalista: 1) Los obstáculos burocráticos-fiscales a las empresas que desearan establecerse en zonas ya muy congestionadas, y la política opuesta cuando le hiciesen en zonas no desarrolladas con recursos explotables. Por otro lado, 2) Las empresas nacionales de propiedad estatal, no necesariamente han de tener beneficios inmediatos como ocurre con las privadas.

Una política social y reductora de la emigración será aquella que favoreciese la instalación de empresas de este tipo en zonas no desarrolladas y con fuerte emigración. Y ello aún en el caso de que no posean recursos energéticos propios, pero sí con materias primas o productos comercializables, ya que estos son hoy muchos

más caros de transportar que la energía. No puedo por menos de señalar el diverso trato a que el Estado somete a unas zonas frente a otras en su acción promocional. Así por ejemplo las inversiones del INI en Andalucía, se concentran en su 90% en su zona occidental quedando el 10% en la oriental. Debo señalar también que para la atracción de industria hacia los lugares de emigración resulta muchos más importante una política crediticia a largo plazo, firme y estable que unas desgravaciones fiscales propiamente dichas. Si aparte de ello se proporciona suelo industrial a precios bajos y/o largo plazo de pago, las posibilidades de atracción del capital privado pueden ser considerables.

Como solución más propiamente social al alcance de los organismos estatales cabría indicar una más realista distribución del crédito oficial. Este contribuiría a la retención de familias hoy emigrantes si se potenciasen los créditos destinados a mejoras de las viviendas en tales lugares, mecanización en cooperativa de los cultivos, cambios racionales de estos según antes indicábamos, etc. Igualmente si se otorgasen créditos y subvenciones para la adquisición de tierras que aumentasen apreciablemente el tamaño de las explotaciones. Es evidente que muchos de estos mecanismos existen ya hoy, pero se requeriría una reforma de los mismos, ya que por regla muy general sus beneficios van a parar con demasiada frecuencia no a los que más lo necesitan —que a menudo terminan por emigrar— sino a los más pudientes. Una política de información adecuada a este respecto, que utilizase los medios de comunicación de masas, y en especial la televisión, tendría unos efectos sociales impresionantes. Téngase en cuenta que a menudo los más menesterosos ni siquiera llegan a conocer la existencia de los créditos a ellos destinados.

La promoción de la educación y de la promoción profesional constituye uno de los elementos más conocidos como medio de promoción social y por tanto no es necesario insistir más en ello. Solo indicar que como señalábamos antes, en un número apreciable y cada vez más creciente de emigrantes interiores juega el factor de la educación de los hijos como decisivo. En la medida en que en las zonas rurales se creen centros de segunda enseñanza se podrá contribuir a la erradicación de esta motivación.

Por otro lado, finalmente ante la decisión irrevocable del traslado, o ante la inexistencia de posibilidades en el lugar de origen, una política social adecuada requeriría dos acciones estatales simultáneas. En primer lugar, una información suficiente sobre empleos y condiciones de vida en el lugar de destino del emigrante, que capacite a éste para hacer frente a las nuevas condiciones de la cultura o subcultura con que ha de enfrentarse. Así, una descripción de los nuevos “roles” familiares, de la situación laboral, de sus derechos y obligaciones como trabajador en la industria y servicios, de las opciones de empleo que les están abiertas, de la lengua

incluso que se utiliza en el lugar de destino contribuirían mucho a la adaptación del emigrante. Podría aquí desempeñar una gran labor un cuerpo de asistentes sociales destacado en los lugares de mayor flujo emigratorio. Tal labor sería complementada, lógicamente en el lugar de destino con actuaciones complementarias de otros asistentes sociales. He aquí una nueva función que absorbería un importante número de técnicos de grado medio, muchos de ellos hoy en condiciones de subempleo o en ocupaciones diferentes de sus conocimientos. También las instituciones ya existentes de formación profesional pueden desempeñar aquí un importante papel a efectos de la adaptación de los emigrantes interiores a su nueva ubicación.

Una segunda forma de actuación estatal consistiría en proporcionar algún tipo de ayuda económica a fondo perdido o en créditos a largo plazo que facilitarían la adquisición de nueva vivienda, mobiliario, gastos de traslado, etc. en o hacia el lugar de destino. Ello, por supuesto solo en los casos en que la emigración fuese racional e indispensable por carencia de recursos naturales en las zonas de origen.

Veamos finalmente las opciones de carácter político que sería necesario establecer. Se trata de decisiones generalmente de ámbito nacional que luego tendría su cauce y sus variedades de aplicación específica a través de las indispensables autonomías regionales.

Ante todo, la reconversión de la propiedad de los medios de producción. Es preciso acometer de una vez una reforma agraria auténtica, que racionalice las unidades de producción en la forma y tamaños a que antes me he referido y que deje la tierra en manos de quienes la trabajan. En este sentido, la acción cooperativa en cuanto a la agrupación de las explotaciones, uso de maquinaria y obtención créditos me parece fundamental. Fuera ya de lo agrario, parece claro que ciertos servicios públicos debieran pasar a manos del Estado. A estas alturas me parece inadmisibles por citar un solo caso la obtención de importantes beneficios por las compañías de producción eléctrica, incluso si sus funciones, como las demás, presentan ahora una baja cotización en Bolsa. La desprivatización de tales beneficios creo que es imprescindible. En los casos en que no fuese aconsejable esta desprivatización de grandes empresas o servicios públicos, un adecuado sistema fiscal de traería las grandes rentabilidades que ahora se reparten no los pequeños accionistas, sino unos cuantos Consejeros. Tal sistema fiscal debiera por supuesto aplicar una tarifa fuertemente progresiva a rentas corporativas o individuales, obteniendo una imagen auténtica del patrimonio y los ingresos que acabase de una vez con el fraude fiscal. Y por supuesto es necesario que los impuestos directos representen al fin una proporción mucho mayor de los ingresos del Estado, que los indirectos.

Por otro lado, el apoyo a la pequeña y mediana empresa debería dejar de ser un tópico en boca de los políticos para convertirse en una realidad. Y una forma eficaz de este apoyo sería aliviarlas de la pesada carga que en este momento les supone una burocracia y unos servicios que a nadie satisfacen. Me refiero al imprescindible saneamiento de la estructura de la Seguridad Social y las mutualidades cuyos problemas, nebulosidades y repercusiones a todos los niveles no es este el lugar de describir. Esta básica reestructuración permitiría a muchas empresas plantearse de nuevo la conveniencia no ya de reducir su personal, sino a menudo incluso ampliarlo, cosa a la que ahora se resisten por las cargas sociales que implica todo nuevo puesto de trabajo. Por supuesto, habría también que iniciar una campaña que enseñase a los usuarios de esos servicios a pedir responsabilidad de sus despilfarros y a responsabilizarse ellos mismos, como en el caso de la frecuente exigencia de medicamentos costosos y similares.

Se dice que España es un país pobre. Pero la cuestión no está en si somos más pobres que Alemania o más ricos que Marruecos. Lo importante es si nuestro patrimonio público está bien o mal administrado. Es hora ya de acabar con lacras que venimos arrastrando desde los últimos 40 años y a veces desde hace un siglo o más. Por eso insisto en que la administración pública española, suficientemente extensa ya, debe adecuarse a las necesidades de nuestro país, hoy, y lograr una mayor eficacia en sus funciones. Organismos obsoletos, subvenciones sospechosas, duplicaciones o multiplicaciones de cargos sin obligación clara alguna, compromisos procedentes del régimen anterior han de ser eliminados de una vez. Todas las instituciones públicas deben ser transparentes en sus presupuestos y eficaces en sus funciones. Y el pueblo, directamente, o a través de sus representantes parlamentarios, será quien fiscalice por su propio derecho, el destino de sus tributos y la administración del patrimonio nacional.

Es asimismo imprescindible una mejor coordinación entre todos los niveles de la Administración pública, para evitar solapamientos, choques y duplicaciones de gastos. En los más altos planos, especialmente entre los Departamentos ministeriales, deberá seguirse una orientación congruente y planificada, inexistente desde 1939 pese a toda la propaganda en contrario. En esa planificación, que en mi opinión debería ser bastante rigurosa, habrían de fijarse objetivos y medios tales, que diversificasen en regiones como la nuestra la estructura del empleo y apoyasen a través de subvenciones centrales —que nuestros propios recursos difícilmente obtendrían por sí solos— la creación de riqueza y puestos de trabajo.

La inversión de fondos para la creación de empleo en nuestra región debiera ser obligatoria según cuotas de volumen apreciable para todas aquellas entidades

que en ella los obtienen, empezando por los Bancos, por supuesto. Y en ello podría jugar un gran papel la conciencia regional comenzando desde ahora por exigírselo. El temor a una retirada masiva de fondos estimularía indudablemente a esas entidades a invertir de inmediato en las zonas en donde hasta ahora sólo han cumplido la, para nosotros, triste función de bocas de absorción de recursos económicos.

Por último, una política racional debiera intentar reconvertir el consumo. Los españoles hemos sido estimulados sobre todo bajo la égida de los llamados tecnócratas, a consumir productos de lujo —demasiadas veces importados— sin un respaldo económico similar al de aquellos países a los que intentábamos imitar en una estúpida cursión de la ideología del desarrollo. Debiéramos potenciar nuevamente el uso de nuestros propios productos —por ejemplo nuestros vinos— a menudo paradójicamente más estimados fuera que dentro de nuestras fronteras. Y a través de una campaña de concienciación y de muy altos impuestos sobre los productos extranjeros o de lujo, limitar su uso a quien estuviese dispuesto a pagarlos.

Todo este saneamiento de nuestra administración, de nuestra economía, de nuestros mecanismos de producción y de nuestros hábitos colectivos tendría, es evidente, consecuencias directas sobre la creación de empleo, particularmente en regiones, como Andalucía, en donde tan grave problema representa hoy. Y este problema no se resuelve con medidas coyunturales o con medias tintas. Hay que adoptar decisiones, y decisiones radicales. Como dijo Marx en 1843, «ser radical es tomar las cosas en su raíz; ahora bien, para el hombre, la raíz es el hombre mismo».

RESUMEN:

Analiza, el autor, con todo tipo de detalles estos dos graves problemas, que desde hace ya bastante años tiene planteados el pueblo andaluz, y de aquí el calificativo de "endémicos".

En la primera parte del artículo, J. Cazorla, pone de manifiesto como las medidas que las distintas administraciones franquistas han ido llevando a cabo, no perseguían otro fin, que el de tratar de encubrir tales problemas, por cuanto que éstas no han pasado de ser simples parches que en forma alguna podían curar tales males. A continuación pasa a analizar los orígenes de tales males así como las consecuencias que de ellos se derivan para el pueblo andaluz, señala como la falta de interés existente en los centros de poder por los problemas regionales, la estructura de la propiedad, la tímida vocación empresarial de los capitalistas-andaluces, etc., han sido factores que han contribuido a que estos males sean perpetuos.

Los problemas de la emigración y de sus protagonistas son igualmente tratados con realismo y seriedad. Por último, el autor, se plantea la necesidad de tomar una serie de medidas, que él, agrupa en técnicas y políticas que permiten erradicar del pueblo andaluz estos males, consiguiendo un derecho que todo pueblo tiene, como es un puesto de trabajo estable para todos y cada uno de sus componentes.

RESUME:

L'auteur analyse, avec pas mal de détail ces deux graves problèmes, que depuis plusieurs années le peuple andalou se pose, et d'ici le qualificatif d'"endémique".

Dans la première partie de l'article, J. Cazorla met en évidence comment les mesures dont les différentes administrations franquistes ont mené à bien n'avaient pas d'autre finalité que celle d'essayer de cacher ces problèmes, parce que celles-ci n'ont été que des simples replâtrages, qui d'aucune façon pouvaient guérir des tels maux. Ensuite, il passe à analyser les origines de ces maux, ainsi que les conséquences qu'y se derivent pour le peuple andalou; il remarque comment le manque d'intérêt existant aux centres de pouvoir pour les problèmes régionaux, la structure de la propriété, la timide vocation patronale des capitalistes andalous, etc., ont été des facteurs qui ont contribué à que ces maux soient perpétuels.

Les problèmes de l'emigration et de ses protagonistes sont également traités avec du réalisme et du sérieux. Finalement, l'auteur se pose la nécessité de pren-

dre une serie de mesures dont il groupe en techniques et politiques qui permet-tient déraciner du peuple andalou ces maux, atteignant un droit dont chaque peuple en a, comme c'est un emploi stable pour tous et chacun de ses composants.

SUMMARY:

The author analyzes in great detail these two serious problems that for many years have plagued the Andalusian population; for the latter he qualifies them as "endemic".

In the first part of the article J. Cazorla indicates that the policies which the different administrations of Franco have been carrying out have no other object than that of trying to conceal these problems, and therefore are nothing more than simple cover-ups which in no way are able to resolve such problems. He continues analyzing the origins of these problems as well as their consequences for the population of Andalusia, indicating the lack of interest in regional problems on the part of those holding political power, the distribution of property, the indecision and reluctance to invest of the Andalusian capitalists, etc., as factors which have contributed to the perpetuation of these problems.

The problems of emigration and its protagonists are treated in an equally serious and realistic manner. In conclusion, the author points out the necessity of taking a series of technical and political measures in Andalusia that will permit the eradication of these problems and the attainment of a right which is that of every member of society: that of a stable job.

